

CONSEJO PERMANENTE DE LA
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y POLÍTICOS

OEA/Ser.G
CP/CAJP-2420/06 corr. 1^{1/}
16 octubre 2006
Original: español

COMENTARIOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS SOBRE ACCIONES
A SEGUIR CON RESPECTO A RESOLUCIONES QUE CONTIENEN MANDATOS
ESPECÍFICOS PARA LA CAJP
[AG/RES. 2252 (XXXVI-O/06)]

DOCUMENTO DE TRABAJO
HACIA UN “CONSENSO INTERAMERICANO DE
POLITICAS PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA”

(Presentado por la Delegación del Perú)

1. Inadvertidamente este documento fue publicado con la clasificación CP/CAJP-2415/06.

DOCUMENTO DE TRABAJO

HACIA UN “CONSENSO INTERAMERICANO DE POLITICAS PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA”

ANTECEDENTES

A. La Sesión Especial del 28 de abril y el mandato de la CAJP

El día 28 de abril de 2006 se llevó a cabo en la sede de la Organización de los Estados Americanos la “Sesión Especial conducente a promover, difundir e intercambiar experiencias y conocimientos relativos al acceso a la información pública y su relación con la participación ciudadana, con la participación de expertos de los Estados y representantes de la sociedad civil”, en cumplimiento con el mandato de la Resolución AG/RES. 2121 (XXXV-O/05).

Esta sesión, que había sido convocada desde el año 2004 y no había podido celebrarse antes por razones presupuestales y de agenda, tuvo lugar en Washington en vísperas del XXXVI Período Ordinario de la Asamblea General de la Organización. La sesión contó con la participación, entre otros, del Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Dr. Evelio Fernández Arévalos; el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Dr. Ignacio Alvarez; la Directora del Departamento para la Promoción de la Gobernabilidad de la Organización, Dra. Mariclaire Acosta; la Directora del Departamento para la Promoción de la Democracia de la Organización, Dra. Elizabeth Spehar, así como de diversos expertos de la sociedad civil y de algunos Estados.

El presente documento de trabajo, propuesto por el Perú, fruto de consultas con representantes de sociedad civil peruana busca sintetizar los aspectos que considera más saltantes de la citada Sesión Especial y procura presentar los elementos para un consenso de políticas interamericanas para el acceso a la información pública, como modo práctico de dar cumplimiento al párrafo 13-a de la Resolución No. AG/RES. 2252 (XXXVI-O/06), la cual recomienda al Consejo Permanente que:

Solicite a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos a que a partir del informe de la citada sesión especial y teniendo en cuenta el informe del Presidente del Consejo Permanente sobre el cumplimiento de la resolución AG/RES. 2121 (XXXV-O/05), y, tomando en cuenta contribuciones de las delegaciones de los Estados Miembros, de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Comité Jurídico Interamericano, del Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales, de órganos, organismos y entidades interesadas de esta Organización, así como de representantes de la sociedad civil, elabore un documento de base sobre las mejores prácticas y el desarrollo de aproximaciones comunes o lineamientos para incrementar el acceso a la información pública.

B. El marco normativo

Reconocer como derecho fundamental el acceso a la información pública implica, por parte de los Estados, asumir un imperativo ético y un deber jurídico. El derecho a acceder a la información

pública se encuentra reconocido a nivel universal en el artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y, a nivel hemisférico, en el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.

Cabe recordar que este artículo establece que *“Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión (y que) este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”*.

La interpretación de este último artículo ha sido desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos así como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana, en su Opinión Consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre de 1985, señaló que el artículo citado comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas y, en tal sentido, estableció que tal derecho tiene dos dimensiones: "la individual y la social". La dimensión individual comprende la difusión del pensamiento y la información, mientras que la dimensión social reconoce que la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e implica el derecho de los ciudadanos al conocimiento de información pública.

En su sentencia N° 74, pfo. 143 e, del 6 de febrero de 2001 (Caso Baruch Ivcher), la Corte estableció que el artículo 13 de la Convención corresponde a un concepto amplio de la libertad de expresión y autonomía de las personas. Su objetivo es proteger y fomentar el acceso a información, ideas y expresiones de toda índole y, de ese modo, fortalecer el funcionamiento de la democracia pluralista.

La Corte Interamericana ha ido más allá al señalar, en la sentencia N° 75, párrafo 45, del 14 de marzo de 2001 (Caso Barrios Altos), que el derecho a la verdad encuentra su fundamento en el artículo 13.1 de la Convención, en cuanto este artículo reconoce el derecho a buscar y recibir información, por lo que recae sobre el Estado una obligación positiva de garantizar información esencial para asegurar la transparencia de la gestión estatal y la protección de los derechos humanos.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión durante su 108° período ordinario de sesiones en octubre del año 2000. Dicha declaración constituye un documento importante para la interpretación del Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En su artículo 4 establece que *"el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos (y que) los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho"*. Añade que *"este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas"*.

También es conveniente mencionar que el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, el Representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para los Medios de Comunicación y el Relator Especial de la OEA para la Libertad de Expresión suscribieron en el 2004 una Declaración Conjunta que señala que el derecho de acceso a la información es un derecho humano fundamental de los ciudadanos y que este derecho debe estar sujeto a un sistema restringido de excepciones.

De otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que la libertad de información está estrechamente vinculada con el principio de transparencia en la administración y con el carácter público de las actividades del Estado. *"Sin la información a que toda persona tiene derecho, es obviamente imposible ejercer la libertad de expresión como vehículo efectivo de la participación cívica o la supervisión democrática de la gestión de gobierno"* (pfo. 282-283 del Informe de la CIDH OEA/Ser.L/V/II.116, Doc. 5 rev. 1 corr. 22 octubre 2002 sobre Derechos Humanos y Terrorismo).

En consecuencia, el establecimiento de un marco jurídico que garantice el ejercicio del derecho de acceso a la información pública es una obligación del Estado, no solo ante su población, sino también ante el sistema interamericano de Derechos Humanos. Esta legislación debe tener como base la presunción que la información es pública ya que, como ha señalado la Corte Interamericana en la Opinión Consultiva ya mencionada, *"una sociedad que no esté bien informada no es plenamente libre"* (Op. Consultiva 5/85, pfo. 70).

El concepto del acceso a la información pública goza de una aceptación casi universal, habiendo adoptado más de 60 países legislación para regular el acceso a la información pública, pudiendo destacarse en la región los casos de Antigua y Barbuda, Belice, Canadá, Colombia, Ecuador, Estados Unidos de América, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Venezuela. Asimismo, por lo menos 8 países más de las Américas están considerando propuestas de leyes sobre acceso a la información. También merece destacarse que 4 países de la región (Colombia, Guatemala, Perú y Venezuela) han incorporado el derecho de acceso a la información pública en sus constituciones.

C. El marco multilateral hemisférico

Teniendo en cuenta este desarrollo jurisprudencial y doctrinal con relación al acceso a la información pública, los países del hemisferio han coincidido en que es conveniente crear estándares nacionales comunes para el respeto de este derecho, ya que ello contribuye a la transparencia, facilita la rendición de cuentas y, por tanto, incide en el fortalecimiento democrático y la lucha contra la corrupción. En ese sentido, los Jefes de Estado del hemisferio reunidos en la Cumbre Extraordinaria de las Américas (enero, 2004) afirmaron que *"el acceso a la información es condición indispensable para la participación ciudadana"* y es necesario establecer *"marcos jurídicos y normativos, así como las estructuras y condiciones necesarias para garantizar a los ciudadanos el derecho al acceso a la información"*.

En los últimos tres años, la Asamblea General de la OEA ha aprobado sucesivas resoluciones sobre el tema de *"Acceso a la información pública: Fortalecimiento de la Democracia"*. En la primera resolución, adoptada el 2003, la OEA reafirma que toda persona tiene la libertad de buscar, recibir, acceder y difundir información y que el acceso a la información pública es un requisito indispensable para el fortalecimiento mismo de la democracia. También se insta a los Estados a que respeten y hagan respetar el acceso a la información pública a todas las personas y de promover la adopción de disposiciones legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para asegurar su reconocimiento y aplicación efectiva.

En esa resolución la Asamblea General también estableció que los Estados deben adoptar las medidas necesarias para facilitar la disponibilidad electrónica de la información pública, que la OEA debe promover seminarios y foros para intercambiar experiencias y conocimientos sobre el tema y

que la Relatoría para la Libertad de Expresión debe continuar incluyendo en su informe anual un apartado sobre el acceso a la información pública en la región.

El año siguiente, el 2004, la resolución aprobada por la Asamblea General de la OEA fue más adelante al alentar a los Estados a que, de acuerdo al compromiso asumido en la Declaración de Nuevo León, elaboren o adapten los respectivos marcos jurídicos y normativos para brindar a los ciudadanos el amplio acceso a la información pública, instando a los Estados a que elaboren y adopten legislación nacional con criterios claros y transparentes. En la misma resolución se encomendó a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión que apoye los esfuerzos de los Estados que lo soliciten en la elaboración de legislación y mecanismos sobre la materia de acceso a la información pública y participación ciudadana.

El año 2005, la resolución sobre acceso a la información aprobada en la Asamblea General, además de recoger los conceptos y principios contenidos en las dos resoluciones anteriores, decidió recomendar al Consejo Permanente que convoque a una sesión especial con la participación de expertos a fin de intercambiar experiencias y conocimientos relativos al acceso a la información pública y su relación con la participación ciudadana. Como es sabido, la sesión tuvo lugar en Washington el 28 de abril pasado.

Como se ha indicado al inicio de este documento, la resolución aprobada en el 2006 (AG/RES. 2252 XXXVI-O/06) recomendó en su párrafo 13-a que el Consejo Permanente solicite a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos elaborar un documento de base sobre las mejores prácticas y el desarrollo de aproximaciones comunes o lineamientos para incrementar el acceso a la información pública en la región.

Es importante subrayar que esta evolución normativa en el marco de la OEA ha sido posible gracias a los aportes recibidos de parte de organizaciones de la sociedad civil. Las resoluciones mencionadas se han inspirado sin duda en una importante serie de declaraciones promovidas por la sociedad civil como los Principios de Johannesburgo, la Declaración de Chapultepec, los Principios de Lima y la Declaración SOCIUS 2003. En ese sentido, es necesario reconocer la labor que ha realizado y que realizan las organizaciones de la sociedad civil a fin de promover la evolución de este tema en el marco de la OEA. Esta labor constituye un ejemplo del trabajo conjunto de la sociedad y los gobiernos en el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática bajo el convencimiento de que el acceso a la información pública fortalece la democracia y permite el control ciudadano de los actos de la administración.

D. El marco conceptual

El acceso a la información pública es un concepto transversal que mantiene estrecha relación con diversos otros temas de la agenda política regional como las condiciones de gobernabilidad democrática, el progreso de la justicia social y la mejora de la calidad de vida, así como la lucha contra la corrupción en el Estado y la sociedad. Por lo tanto, este derecho o garantía se convierte en una base para mejorar la vida de los ciudadanos del hemisferio y para buscar un desarrollo económico y social más equitativo.

1. Vínculo con la gobernabilidad democrática

Hay consenso en que existe una interdependencia entre el acceso a la información pública y la gobernabilidad democrática. Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de las personas la información que requieran de manera oportuna y completa con el propósito de crear una cultura de transparencia y promoción de la gobernabilidad del Estado. Ello implica una responsabilidad conjunta del Estado y de la ciudadanía. Por ello, hay coincidencia en que el Estado debe promover mecanismos de acceso a la información pública y garantizar dicho acceso y que, por su parte, la ciudadanía, con la cooperación y apoyo de la sociedad civil, debe exigir el acceso a la información pública.

En la Sesión Especial del 28 de abril, el Presidente de la CIDH recordó que “el acceso a la información en poder del Estado es igualmente necesario para evitar abusos de los funcionarios gubernamentales que, acaparados en un sigilo y reserva violatorios del principio republicano de publicidad de los actos de la administración pública y de los poderes del estado, violan normas jurídicas impunemente, con grave deterioro de la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones pública y en quienes ejercen magistraturas en los poderes supremos del Estado”.

Es así que, adicionalmente a lo normado en el artículo 13 del Pacto de San José, los Jefes de Estado de la región reconocieron en el curso de la Tercera Cumbre de las Américas que una administración sólida de los asuntos públicos exige instituciones gubernamentales efectivas, transparentes y que realicen una debida rendición de cuentas.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Opinión Consultiva No. 5/85 ha establecido que “las justas exigencias de la democracia deben, por consiguiente, orientar la interpretación de la Convención y, en particular, de aquellas disposiciones que están críticamente relacionadas con la preservación y el funcionamiento de las instituciones democráticas”. La Corte agregó, además, que el derecho de cada persona a estar bien informada es un requisito previo fundamental para una sociedad democrática.

La Corte también ha subrayado la incidencia de la libertad de expresión en la consolidación de la democracia. Es de particular relevancia lo señalado por ella en el caso “La Nación” sobre la transparencia de las actividades gubernamentales y su incidencia en la libertad de expresión al permitir el funcionamiento de “mecanismos de control” para que los ciudadanos denuncien toda irregularidad”. En el mismo caso, la Corte reconoció que el “control democrático” por parte de la sociedad civil exige reducir al mínimo las restricciones al debate de cuestiones de interés público. En el mismo sentido, en el caso “Canese” la Corte consideró la importancia de la libertad de expresión en el contexto de una campaña electoral y ha afirmado que ésta “permite una mayor transparencia y fiscalización de las futuras autoridades y de su gestión”.

Asimismo, en la Sesión Especial el Presidente de la CIDH expresó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido expresamente el rol que juega la divulgación de información en una sociedad democrática, particularmente porque habilita a los ciudadanos a controlar las acciones de gobernantes a quienes ha confiado la protección de sus intereses. Se deriva de ello que existe una obligación positiva de parte del Estado de brindar esa información a los ciudadanos, especialmente cuando se encuentra en su poder y no existen otros medios para acceder a ella. Ello sin perjuicio de las limitaciones excepcionales que se establezcan previamente en la ley, con respeto de los principios de proporcionalidad y necesidad.

Por su parte, en la citada Sesión, el Relator Especial de la CIDH subrayó que la discusión y el debate público sobre el acceso a la información en poder del Estado fomenta el afianzamiento de las democracias. Hizo notar que el acceso a la información promueve la rendición de cuentas y la transparencia dentro del Estado y permite contar con un debate público sólido e informado. De esta manera, el acceso a la información habilita a las personas a asumir un papel activo en el gobierno, condición necesaria para el mantenimiento de una democracia sana.

Por otro lado, la posibilidad de acceder a las informaciones en poder del Estado es un requisito fundamental para el ejercicio responsable del derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones. En esta línea se manifestó el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, al expresarse sobre los objetivos que persiguen los informes que los Estados deben presentar en cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Dichos informes deben “facilitar el examen público de las políticas de los gobiernos con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales y estimular la participación de los diversos sectores económicos, sociales y culturales de la sociedad en la formulación, aplicación y revisión de las políticas pertinentes.” (Presentación de Informes por los Estados partes, Ob. Gral 1, UN. ESCOR, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 3er período de sesiones, párrafo 5, ONU Doc. E/1989/22).

En fin, los Jefes de Estado de las Américas, en la Declaración de Nuevo León sostuvieron que “el acceso a la información en poder del estado... es condición indispensable para la participación ciudadana y promueve el respeto efectivo de los derechos humanos”.

2. Vínculo con el desarrollo social

El acceso a la información pública también es una herramienta para el desarrollo social y económico.

Como lo señaló el Relator Especial de la CIDH en la Sesión del 28 de abril el acceso a la información también es vital para combatir la injusticia socioeconómica. Tal como fuera sostenido por la Relatoría en su Informe Anual de 2002, los pobres con frecuencia adolecen de falta de acceso a la información sobre los propios servicios que el gobierno ofrece para ayudarlos a sobrevivir. Los grupos marginados necesitan el acceso a la información sobre estos servicios y sobre muchas otras decisiones del gobierno y de los organismos privados que afectan profundamente sus vidas.

Cabe recordar también que, en el año 2004, en cumplimiento de la resolución 2057 de la OEA, la Relatoría incluyó en su informe anual un apartado sobre el tema titulado "Acceso a la información en el hemisferio: El acceso a la información y el desarrollo económico", en el que se argumentó a favor de las leyes sobre acceso a la información como una herramienta para el desarrollo económico y social.

Sin duda, una mayor transparencia en la información no sólo fortalece los mecanismos de participación democrática y es un medio eficaz para luchar contra la corrupción, sino que también puede ser un factor de integración política, económica y comercial,

Sobre el particular, la Dra. Elizabeth Spehar, Directora del Departamento para la Promoción de la Democracia de la Organización expresó en la citada Sesión Especial que, además de la obligación del gobierno hacia la ciudadanía de facilitar el acceso a la información, se deben incluir otros actores, tales como las empresas y personas del sector privado que también, por su posible peso e importancia en la sociedad, deben también tomarse en consideración. Señaló además el papel que juegan los medios de comunicación en donde se puede abordar el tema de acceso a la información pública desde diversas perspectivas.

3. Vínculo con la lucha contra la corrupción

Otra dimensión sustancial del acceso a la información pública es que contribuye a la lucha contra la corrupción.

Sobre el particular, en el año 2001, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión señaló en su Informe Anual que, ante *“prácticas que fomentan una cultura de secretismo de la información en manos del Estado (...), los agentes que disponen de la información optan por denegarla por temor a ser sancionados”*. Por ello, la Relatoría subrayó que estas prácticas *“ponen en peligro el sistema democrático constitucional permitiendo el incremento de actos de corrupción”*.

En la Tercera Cumbre de las Américas, los jefes de Estado y de Gobierno reconocieron la necesidad de identificar los esfuerzos para combatir la corrupción y resaltaron la necesidad de respaldar iniciativas que permitan una mayor transparencia para garantizar la protección de los intereses del público y que los gobiernos se vean alentados a utilizar sus recursos efectivamente para el bien colectivo. La corrupción sólo puede controlarse a través de un esfuerzo conjunto encaminado a fomentar el nivel de transparencia en la acción del gobierno.

LOS ELEMENTOS PARA UN “CONSENSO INTERAMERICANO DE POLÍTICAS PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA”

Los países del hemisferio pueden establecer un consenso de políticas para el acceso a la información pública sobre la base de los siguientes antecedentes y elementos:

- las estipulaciones sobre el tema de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece (art. 13), la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 19); la Carta Democrática Interamericana; y la Declaración de Nuevo León;
- la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la Declaración Conjunta sobre Acceso a la Información del Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, el Representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios de Comunicación y el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptada en 2005;
- los Informes del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación del acceso a la información en el hemisferio de los años 2003, 2004 y 2005; y

- las iniciativas adoptadas por la sociedad civil relativas al acceso a la información pública, particularmente la Declaración de Chapultepec, los Principios de Johannesburgo, los Principios de Lima y la Declaración SOCIUS Perú 2003: Acceso a la Información, así como el Foro Regional Acceso a la Información Pública: retos para el derecho a la Información en el Continente, realizada en la ciudad de Lima, Perú, entre los días 20 y 21 de enero del 2004; y
- las contribuciones presentadas en la Sesión Especial sobre acceso a la información pública que tuvo lugar en la sede de la Organización de los Estados Americanos el 28 de abril de 2006 en cumplimiento del mandato de la Resolución AG/RES. 2121 (XXXV-O/05).

Un Consenso Interamericano de Políticas para el Acceso a la Información Pública debería contener, entre otros, los siguientes campos de acción:

1. Garantizar el acceso a la información como derecho

- Los Estados deben reconocer y respetar el derecho de todas las personas a buscar y recibir la información pública que requieran de parte del Estado.

2. Reconocer el vínculo entre el acceso a la información y la promoción de la gobernabilidad democrática

- El acceso a la información es un derecho de las personas y al mismo tiempo una exigencia de una sociedad democrática.
- Todas las personas tienen derecho a fiscalizar de manera efectiva la labor de la administración estatal, de los poderes del Estado en general y de las empresas que prestan servicios públicos. Para hacerlo, necesitan conocer la información que obra en su poder.

3. Reconocer los vínculos entre el acceso a la información pública y la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción

- El acceso a la información es indispensable para que las personas participen en los asuntos públicos, en la toma de decisiones, y en general, para identificar las responsabilidades de los servidores públicos, valorar objetivamente los hechos, y formarse una opinión alcanzando mayores niveles de participación en la vida política, económica, social y cultural en un país.
- Este derecho también hace posible la fiscalización, el escrutinio y el debate adecuado sobre las acciones de gobierno, condiciones esenciales para la transparencia en la gestión de las entidades públicas y para evitar la corrupción y otros abusos del poder.

4. Establecer legislación sobre el acceso a la información pública y sobre las obligaciones del Estado en este campo

- Los Estados se deben comprometer a adoptar, en el marco de sus normas constitucionales y compromisos internacionales, las legislaciones y las medidas

- reglamentarias necesarias que permitan el ejercicio efectivo del derecho a acceder a información pública.
- Dichas normas deben estar destinadas a estipular que el Estado y las empresas que prestan servicios públicos están comprometidos a respetar y garantizar el acceso a la información a todas las personas.
 - Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de las personas la información que requieran en forma oportuna y completa. Es responsabilidad gubernamental crear y mantener registros públicos de manera seria y profesional para que el derecho a la información pueda ejercerse a plenitud.
 - Se requiere de una política pública que preserve y desarrolle una memoria corporativa en las instituciones gubernamentales.
 - Las normas que desarrollen este derecho deben garantizar la máxima transparencia y reconocer que toda persona puede ejercerlo y que la información puede obtenerse en el soporte material indicado por el solicitante o al menos en el formato en que se disponga.
 - Las autoridades estatales deben proporcionar la información solicitada en forma oportuna y un plazo razonable, sin exigir formalidades que puedan entorpecer el ejercicio de este derecho.
 - La entrega de la información debe ser gratuita en principio.
 - El Estado debe proveer los recursos necesarios para garantizar el acceso a la información pública, incluyendo fondos para el archivo y acopio de información, así como para la capacitación de personal.
 - El Estado está en la obligación de promover, a través del sistema educativo y por medio de campañas de formación cívica, una cultura de transparencia en la sociedad y en el sector público.
 - La sociedad civil debe cumplir un papel en el diseño de legislación en la materia así como en la vigilancia de esta normatividad y en su difusión.
 - Las legislaciones deben considerar mecanismos ágiles y sencillos a los que el ciudadano pueda recurrir ante la negativa injustificada o arbitraria de información.

5. Reconocer el vínculo entre acceso a la información y el ejercicio libre de la actividad periodística

- Los Estados deben garantizar y respetar el ejercicio periodístico y la libertad e independencia de los medios de comunicación, así como asegurar a los periodistas las condiciones para acceder a la información y para difundirla en el ejercicio de su profesión.
- Ningún periodista debe ser obligado por el poder judicial o una autoridad de gobierno a revelar sus fuentes de información o el contenido de sus apuntes y archivos personales y profesionales.
- Los Estados y los medios de comunicación deben colaborar para que las normas y políticas de acceso a la información pública contribuyan a promover la gobernabilidad democrática, la justicia social y la lucha contra la corrupción.

6. Normar apropiadamente las excepciones al acceso a la información pública

- Las excepciones al acceso a la información pública se deben regular en forma limitada, sólo por normas legítimas de nivel constitucional o con rango de ley

acordes con los principios que orientan una sociedad democrática y siempre que sean necesarias para la protección de la seguridad nacional o el derecho legítimo del individuo a la intimidad.

- Las negativas de acceso a la información pública deben estar justificadas y debidamente comprendidas en el régimen restringido de excepciones.
- La ley, habiendo determinado los casos específicos de información clasificada, debe establecer plazos y procedimientos razonables para su desclasificación tan pronto como el interés de seguridad nacional lo permita, de manera que una información no sea mantenida clasificada indefinidamente.
- Se debe encargar a instancias de revisión independientes que determinen si son legítimas y razonables las excepciones establecidas al derecho al acceso a la información pública.

7. Garantizar la protección legal del acceso a la información pública

- Es necesario que existan mecanismos ágiles y sencillos para recurrir a la justicia ante una negativa injustificada de acceso a la información pública.
- El Poder Judicial y las instituciones de defensoría pública deben vigilar el cumplimiento de las disposiciones nacionales e internacionales con relación al acceso a la información pública.
- La autonomía e independencia del Poder Judicial es fundamental para garantizar el derecho de acceso a la información en los casos de negativa de las autoridades y funcionarios o de restricciones a su ejercicio.
- Si es requerida por el solicitante, una autoridad judicial imparcial y competente debe poder revisar la validez de dicha negativa y disponer la entrega de la información.